

# LA RAZÓN DE UN COMBATE



**Joan Garcés**

*Abogado y politólogo español, asesor del Presidente Allende, autor de importantes libros analíticos del proceso chileno 1970-1973.*

El combate de La Moneda tenía más sentido político que militar. Tras la primera hora y media de intercambio de fuego, llegó la noticia de que la Aviación había bombardeado la residencia de Tomás Moro. Las emisoras de radio anunciaron que la Aviación tenía orden de bombardear también el Palacio de Gobierno a las 11 si Allende no se rendía. Éste resolvió reducir el número de víctimas dejando en libertad de acción a la guardia presidencial de Carabineros, la que abandonó el lugar en su integridad, así como los Generales Urrutia y Alvarez que, en su temor a combatir no hallaban excusa para justificar su partida. Una excepción, la del Director General de Carabineros, Sepúlveda Galindo, que se mostraba reacio a abandonar al Presidente y fue el último militar en salir del recinto, media hora después de haber recibido la orden y apenas unos minutos antes de que cayeran las primeras bombas.

Hacia las 10:45, los Ministros presentes —Clo-

domiro Almeyda, de Relaciones Exteriores, Carlos Briones, del Interior, Jaime Tohá, de Agricultura, José Tohá, ex ministro de Defensa, y Fernando Flores, Secretario General de Gobierno—, solicitan al Presidente una reunión a puerta cerrada. No duró más de tres minutos. Allende la interrumpió en cuanto comprobó que algunos Ministros le aconsejaban que se entregara y salvara su vida.

El único momento durante aquella mañana en que Allende perdió la calma y dio prueba de indignación, llenando de improprios a alguien, fue cuando Alfredo Joignant le telefonó para comunicarle que había entregado el mando de la Dirección General de Investigaciones a un funcionario. Aunque reducido, unos seiscientos hombres equipados con metralletas, la policía civil era el único cuerpo armado del estado que tenía a su frente a un militante de un partido obrero. Que fuera precisamente en aquellos momentos, en la hora de combatir, cuando el único militante de la

Unidad Popular con mando de un servicio armado profesional resolviera, por sí y ante sí, abandonar el puesto que le había confiado el Presidente de la República en tanto que hombre de confianza, resultó intolerable para Allende. No sólo eran los generales que se declaraban leales al gobierno, pero que no tenían ningún compromiso con los partidos populares, los que no querían combatir. Así, tras Carabineros, la Aviación, el Ejército y la Marina, llegaba la noticia de la neutralización de la policía civil.

Pasadas las 11, un cruce de líneas telefónicas permitió escuchar la voz del general Baeza, jefe de las operaciones en el centro de Santiago:

—"...de los de La Moneda no debe quedar rastro, en especial de Allende; hay que exterminarlos como "baratas" [cucarachas];... el objetivo debe ser destruido por tierra y aire..."

A esas alturas, dentro de La Moneda, quedaban menos de 50 civiles. De ellos, unos 15 militantes del Partido Socialista y 6 agentes del Servicio de Investigaciones pertenecían a la escolta presidencial. Veintiún hombres de armas era todo el efectivo de combate contra el que se enviaban tropas de infantería, blindados y bombarderos Hawker Hunter. El desenlace no ofrecía dudas. Nos encontrábamos, además, todo el equipo de trabajo del Presidente. La sensación de la muerte inminente embargaba el ánimo de todos. Poco antes del bombardeo aéreo, Allende reunió a sus colaboradores personales y les preguntó qué resolvían hacer. El jurista Arsenio Poupin, Subsecretario General de Gobierno, señaló: "Nuestra obligación es quedarnos aquí". Los restantes contestaron de modo semejante: Augusto Olivares, periodista, Jaime Barrios, economista, Claudio Gimeno, sociólogo y cuatro médicos —Jorge Klein, psiquiatra, Eduardo Paredes, ex Director General de Investigaciones. Ricardo Pincheira, del Servicio de Seguridad del Partido Socialista, Enrique Paris, asesor en cuestiones de educación y

ciencia, así como Enrique Huerta, intendente de Palacio. Olivares murió durante el combate que siguió al bombardeo. Todos los restantes junto con los supervivientes socialistas de la escolta fueron detenidos y murieron en la tortura dos días después. También resolvieron permanecer Carlos Jorquera, periodista, Osvaldo Puccio, secretario privado, y su hijo, estudiante de Derecho, el equipo de médicos de la presidencia —Danilo Bartulín, Arturo Jirón Patricio Arroyo, Oscar Soto, Arturo Guijón—, el abogado Daniel Vergara, Subsecretario del Interior, Lautaro Ojeda, Subsecretario General de Gobierno, y una mujer, Miriam Contreras, secretaria privada de Allende. En el Ministerio de Relaciones se encontraban los Ministros Almeyda, sociólogo político, Briones, jurista, Aníbal Palma, abogado, José Tohá, periodista y Jaime Tohá, ingeniero.

En un momento dado, Allende se dirigió a mí y me ordenó partir. Ante mi gesto de sorpresa, argumentó tres razones para explicar su decisión:

—"... y, por último, alguien tiene que contar lo que aquí ha pasado, y sólo usted puede hacerlo. ¿No es cierto? —preguntó a sus restantes colaboradores, quienes asintieron. En todos ellos, particularmente en aquellos a quienes veía por última vez, he pensado al escribir el presente libro, inesperado superviviente de la masacre de La Moneda, la primera de las que iban a seguir en miles de fábricas, poblaciones y campos a lo largo de todo el país.

En los mismos momentos que Allende y su equipo personal resolvían rechazar la oferta de rendición y continuar resistiendo, otra reunión tenía lugar en la industria Sumar. La del Comité Político de la Unidad Popular. Tras media hora de deliberaciones, los dirigentes de los partidos políticos llegaban a una conclusión: no ofrecer resistencia, los trabajadores debían abandonar los centros de trabajo y retirarse a sus casas. A las 11:30 empezaba a circular la orden que



*Prats y Allende: conciencia y responsabilidad republicana.*

refrendaba una constatación de impotencia, resultado de las políticas seguidas durante tres años a que hemos aludido en los capítulos anteriores.

A las 12:20, tras unos 15 minutos de bombardeo aéreo, el recinto de La Moneda ardía por todos los costados. En el interior, el aire tóxico y el humo dificultaban la respiración. Allende y sus colaboradores se distribuyeron las pocas máscaras antigás disponibles, y se aprestaron a continuar el combate. Tropas de infantería comandadas por el general Javier Palacios iniciaban el asalto mientras los tanques disparaban sobre las ventanas. Las dos docenas de civiles lograron resistir en su interior una hora más, en medio de las llamas y del derrumbe de techos y pisos. Hacia las 13:45 los primeros soldados entraban en el ala donde se habían concentrado los supervivientes, la de la calle de Morandé, donde se encontraba el comedor. El gabinete presidencial, la sala del Consejo de Ministros, la secretaría privada, eran pasto del fuego. Poco antes de las 2 de la tarde, moría Allende. Tenía entre las manos el fusil con que había combatido. No alcanzó a convocar el referéndum.

Si la dirección principal de la contrarrevolución venía buscando desde hacía meses el derrocamiento del gobierno, aunque no el cadáver del Presidente de la República, ¿por qué Allende desoye esa mañana a quienes le aconsejaban salvar su vida y abandonar el país? Las razones son las mismas que le resolvieron a no renunciar a la presidencia dos meses antes, el 16 de julio, cuando nos convocó a Vuskovic, Martner y a mí para pedirnos nuestro parecer sobre la conveniencia de su dimisión, tras llegar a la convicción íntima de que las divergencias entre los partidos de la Unidad Popular impedirían al gobierno poner en práctica las iniciativas que le parecían dramáticamente inaplazables.

Allende esta persuadido de que la institución de la Presidencia de la República y por extensión el Estado en su dimensión democrática, era el único frente de contención militar y política contra el desencadenamiento de la violencia y la guerra civil. Sin los recursos del gobierno, las organizaciones de los trabajadores —partidos, sindicatos, cordones industriales, comandos comunales, etc.— se le aparecían como divisiones enteras de un ejército a la merced del adversario, impotentes de ofrecer por ellas mismas un resistencia orgánica equivalente al nivel de la agresión de que eran objeto desde 1972.

A través de la decisión de defender hasta el fin la legalidad democrática, Allende deseaba imposibilitar a la burguesía la reconstrucción del aparato del Estado tradicional, condenándola a entrar en conflicto con el sentido de la evolución histórica del país en su configuración socioeconómica contemporánea. Su propia vida era el último recurso que se había reservado el hombre político singular que era Allende. Muchos



dirigentes de la insurrección, desde los democristianos de Frei hasta los militares del general Bonilla, habían alimentado la ilusión de forzar un simple remplazo del bloque social que detentaba el gobierno, sustituyéndolo por el que era mayoritario en el Congreso, sin alterar sustancialmente las instituciones del Estado. Pero semejantes especulaciones no habían contemplado la necesidad de bombardear el palacio de La Moneda con el Presidente de la República dentro, obligándoles a arrasar las instituciones políticas que deseaban recuperar.

La tarde del 11 de septiembre, el cadáver del Presidente Allende impedía a la oposición instalarse al frente del Estado que había existido hasta esa mañana, aún en la hipótesis de que algún sector de la propia dirección de la izquierda hubiera estado predispuesto

a aceptarlo a cambio de, por ejemplo, el reconocimiento de la organización sindical o del Parlamento por la Junta Militar. El núcleo burgués tradicional que había dirigido la contrarrevolución, se vio enfrentado al problema —no deseado— de tener que construir otro Estado. Lo que le convertía en prisionero del maleficio histórico derivado de haber tenido que demoler la organización estatal construida bajo su propia hegemonía social. Semejante situación, presente en las proyecciones de futuro que se elaboraron en La Moneda entre 1970 y 1973, debía plantear a la derecha un problema prácticamente insoluble a medio plazo —siempre que la izquierda supiera aprovechar el legado histórico acumulado después de 1970—. En el supuesto de que la contrarrevolución se impusiera militarmente, yo estimaba que en un primer momento sería normal que el aparato militar asumiera la totalidad de las funciones del Estado, incluida la jurisdiccional a través de la proclamación del Estado de guerra y la clausura del Parlamento. Pero más allá de la emergencia de los primeros meses, la necesidad de edificar un nuevo régimen institucional debía conducir a la burguesía a la aporía de intentar levantar un Estado fascista —lo que nos parecía inviable, dadas las condiciones objetivas y subjetivas del país— o, de reconstruir alguna variante del Estado tradicional, lo que debía resultar asimismo impracticable en la medida que sus fundamentos básicos habían sido apropiados por el movimiento popular, y yacían calcinados el 11 de septiembre de 1973 entre los escombros del gobierno constitucional. Fenómeno éste que, como culminación de la estrategia seguida entre 1970 y 1973, debía contribuir a facilitar "más pronto que tarde" la instauración de un Estado democrático y popular.

Había, asimismo, en la opción de Allende, la voluntad de asumir plenamente la responsabilidad que le incumbía en su calidad de principal portavoz de los trabajadores y de máxima autoridad del Estado. Desde un punto de vista ético, le resultaba inaceptable que un dirigente gobernante desconociera sus deberes y compromisos, abandonando a sus seguidores a la persecución y al país a la violencia desenfrenada a cambio de garantizar su seguridad personal.

Era un problema de consecuencia consigo mismo,

con sus convicciones íntimas y sus planteamientos públicos:

"Quienes pretenden sacarnos del camino que nos hemos trazado, quienes mintiendo y calumniando hablan de que en Chile no hay libertad, se ha suprimido el derecho de información, está en peligro la prensa, son los que mistifican para poder, engañando, encontrar apoyo en determinados sectores, y son los conjurados en el ansia turbia de oponerse a la voluntad popular, y yo les digo a ustedes, compañeros, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad: yo no tengo pasta de apóstol y pasta de Mesías, no tengo condiciones de mártir, soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado; pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile: sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás; que lo sepan: dejaré La Moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Que lo sepan, que lo oigan, que se les grabe profundamente: defenderé esta revolución chilena, y defenderé el gobierno popular porque es el mandato que el pueblo me ha entregado; no tengo otra alternativa; sólo acribillándome a balazos podrán impedir la voluntad que es hacer cumplir el programa del pueblo."<sup>1</sup>

Con su resistencia ante las presiones de la contrarrevolución Allende quiso reafirmar hasta el último instante su voluntad de mantener unido el movimiento popular en torno de su más importante instrumento político —el gobierno—, retardando la disgregación interna de la Unidad Popular tras opciones tácticas contrapuestas. Con su actitud y sacrificio, deseaba dejar establecido un nexo duradero entre el pasado y el futuro del proceso de desarrollo de la democracia y el socialismo en Chile, entregando a los trabajadores y al país un testimonio de valor y generosidad en la lucha por sus libertades, dignidad y bienestar.

#### NOTA:

1 Alocución radiotelevisada, pronunciada en el Estadio Nacional de Santiago, diciembre 1971.